EN LO PRINCIPAL: INTERPONE QUERELLA

PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS

SEGUNDO OTROSÍ: COPIAS

TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER

S.J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

JAVIER IGNACIO REBOLLEDO ESCOBAR, periodista, chileno, cédula nacional de identidad número 13.051.471-5, domiciliado para estos efectos en Calle Cienfuegos N°41, Santiago, interpone querella criminal en investigación RUC 1.900.873.785-4, RIT Ordinaria-4342-2021, en contra quienes resulten responsables, por los delitos contemplados en el artículo 161-A del Código Penal, 43 inciso segundo de la Ley N°19.974 y los delitos que correspondan en el Código de Justicia Militar en caso de que los responsables formen parte de una institución armada, por los hechos y el derecho que se expondrán:

HECHOS

En el desempeño de mi trabajo como periodista de investigación, he publicado variados artículos y libros sobre las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura. Sin embargo, también he escrito sobre hechos ocurridos en los primeros años de la vuelta a la Democracia, publicando recientemente mi libro “El Rati” que trata sobre el funcionamiento de la instituciones a cargo de desarticular a grupos armados, que, a pesar de no estar en dictadura, siguieron practicando la tortura y cometiendo otros delitos.

Mi trabajo no ha estado exento de obstáculos por la naturaleza de los hechos que busco difundir, incluso tuve que enfrentar una querella criminal por injurias y calumnias, de un militar condenado en Punta Peuco, a raíz de lo informado en mi libro “Camaleón” que describe los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tejas Verdes, perpetrados entre otros por el querellante. Esta causa culminó con la sentencia absolutoria dictada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, sin embargo, el hecho de intentar la acción, en sí misma constituye un acto de amedrentamiento.

En el contexto de las permanentes tensiones entre mi trabajo y las personas que buscan inhibir mis investigaciones, es que el medio especializado “CIPER” y el equipo de investigación de “Radio Bio Bio” dieron cuenta que dentro de las posibles personas objeto de interceptaciones telefónicas y seguimientos, figura mi nombre.

En particular se señala que en la investigación que la Fiscalía desarrolla sobre interceptaciones telefónicas al Capitán (R) Rafael Harvey y al periodista Mauricio Weibel, existen antecedentes suficientes para presumir el monitoreo de inteligencia a los periodistas Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña, Santiago Pavlovic, Danae Fuster, además de mi persona.

Desconozco el fundamento de la interceptación, toda vez que no estoy imputado de ningún delito, ni implicado en actividades que habilitan las medidas de la Ley de Inteligencia, ni menos en asuntos relacionados con la Defensa Nacional.

DERECHO

Los hechos descritos, el de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia fuera del marco legal, configura el delito contemplado en el 161-A del Código Penal que sanciona las conductas de interceptación, grabación o reproducción de conversaciones privadas.

La Ley de Inteligencia establece de manera precisa los supuestos de uso de esta facultad intrusiva por parte de las Fuerzas Armadas, disponiendo en su artículo 20, que la “inteligencia militar” comprende actividades para cautelar la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas no pueden desarrollar labores de policía, excepto la Armada en su rol de Policía Marítima (a través de la DIRECTEMAR), y la Fuerza Aérea de Chile en su rol de Autoridad Aérea (a través de la DGAC). El Ejército no tiene autorización para desempeñar actividades policiales en ningún supuesto de normalidad constitucional.

La investigación sobre interceptaciones telefónicas cometidas por miembros del Ejército en mi caso es múltiplemente ilícita: ilícita por ser ejercida sin ningún fundamento que sustente la medida intrusiva e; ilícita también porque el Ejército no puede desempeñar labores policiales, sino solo para proteger la Defensa Nacional que de ningún modo se pone en peligro con mi labor periodística.

Asimismo, por el hecho de realizar la interceptación de mis comunicaciones privadas, existen también antecedentes que configuran el delito contemplado en el artículo 43, incisos segundo de la Ley N°19.974 sobre Inteligencia, que establece:

El funcionario de los organismos de inteligencia del Sistema que utilizare la información recopilada o elaborada por dichos organismos en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, en virtud del artículo 43 de la misma Ley de Inteligencia, se entiende que en caso de que los responsables tengan la calidad de militar, se aplicarán los delitos y penas correspondientes de acuerdo al Código de Justicia Militar. De esta forma, existe la posibilidad de la configuración de delitos militares que se determinarán de acuerdo al avance en la investigación.

El derecho de interponer querrela criminal se funda en mi condición de víctima según el artículo 111 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior y como este es un delito donde existe participación de funcionarios públicos y afecta Derechos Fundamentales, si aún no existiese claridad de mi condición de víctima en el estado actual de la investigación, la querrela es admisible en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 111 inciso segundo del Código Procesal Penal.

POR LO TANTO, se tenga por interpuesta querrela criminal y se remita a la Fiscalía Centro Norte a cargo de la investigación.

PRIMER OTROSÍ: Se solicitan las siguientes diligencias a la Fiscalía correspondiente:

1. Se me cite a declarar sobre las investigaciones periodísticas que estaba llevando a cabo al tiempo que se realizaban las interceptaciones a mis comunicaciones privadas por parte del funcionarios del Ejército.

SEGUNDO OTROSÍ: Desde ya se solicita al señor o señora Fiscal del Ministerio Público copia íntegra de la carpeta investigativa.

TERCER OTROSÍ: Confiero patrocinio y poder en esta causa al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión BRANISLAV MARELIC ROKOV, cédula de identidad número 16.092.326-1 domiciliado para estos efectos en Cienfuegos N°41, comuna de Santiago, correo de notificación bmarelic@uahurtado.cl, quien firma en señal de aceptación.